



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

PROCESO	Verbal (Servidumbre de conducción eléctrica)
DEMANDANTE	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
DEMANDADO	Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda.
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado
CUDR	05001-31-03-012–2020-00265-01.
RADICADO INTERNO	114-22.
PROVIDENCIA	091-23.
DECISIÓN	De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, que regula de manera especial las servidumbres de conducción eléctrica, puede la parte demandada solicitar la práctica de avalúo para la tasación de la indemnización, cuando no esté conforme con la realizada por la demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede la Sala a resolver la apelación formulada por la apoderada de la parte demandada, en contra del auto del 11 de octubre de 2022, en lo atinente a la negativa de nombrar peritos, por ser extemporánea, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

1.- **Del trámite.** Presentó Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., demanda verbal, pretendiendo la imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica y de telecomunicaciones sobre un predio denominado “LOS HORIZONTES” que se encuentra ubicado en el corregimiento “VALENCIA DE JESÚS”, jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), identificado con la matrícula inmobiliaria No. 190-29285 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de dicho municipio, propiedad de Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda.

(Archivo 02).

Dicha demanda fue admitida el 12 de octubre de 2020 (Archivo 04) y notificada a la sociedad accionada en debida forma el 27 de abril de 2022 (Archivo 46), conforme se dejó establecido en auto del 16 de mayo del mismo año (Archivo 47), confiriéndose poder por parte de aquella a profesional del derecho, mediante escrito remitido el 23 de junio de 2022 (Archivo 50), a quien se le reconoció personería en proveído del 26 de septiembre de la misma anualidad (Archivo 51).

Seguidamente, en memorial enviado el 04 de octubre de 2022, el vocero judicial de la demandada solicitó la designación de peritos para que fuera avaluado el daño que se ocasionaría a la misma con la imposición de la servidumbre sobre el terreno de su propiedad, en razón de que la parte demandante había tasado los perjuicios, con fundamento en inventarios que fueron aportados con la demanda y que consideraban que no reflejaban una indemnización real e integral tal como lo establece la Ley 56 de 1981.

Para tal efecto, adujo que en el acta de cultivos y maderables de fecha 28 de septiembre de 2018, arrimado a la demanda, se relacionaban 152 árboles; en el avalúo comercial del predio "Los "Horizontes" realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Santa Marta y del Magdalena, de fecha junio 05 de 2019, figuraba un inventario de cultivos y maderables de 134 árboles; y en el inventario de árboles y vegetación afectada dentro de la franja objeto de servidumbre, obtenido en la visita practicada al predio "Los Horizontes", el día 29 de junio de 2022, se relacionó un cambio significativo, pues sobre la franja se encuentra una cerca viva en swinglea, con una altura promedio hasta la copa de 8 metros sembrada aproximadamente a un (1) metro, en una longitud de 484.45322 metros y una cantidad de 239 unidades de árboles.

Así las cosas, aduce que con la inspección decretada y practicada dentro del trámite de la demanda se había advertido la diferencia existente entre el inventario presentado con la misma y la realidad, por lo que, al acogerse la estimación realizada por la demandante, en la sentencia, se generaría un detrimento de los derechos y garantías mínimas de la demandada, como lo es la indemnización real e integral.

Aunado a lo anterior, expuso que el avalúo comercial aportado había sido

elaborado el 05 de junio de 2019, esto es, que tenía más de tres (3) años, por lo que había perdido vigencia y resultaba completamente injusto.

2.- El auto apelado. Mediante proveído del 11 de octubre de 2022, el Juzgado de primera instancia negó la solicitud de designación de peritos solicitada, por considerar que la misma había sido presentada de manera extemporánea, por cuanto el artículo 2.2.3.7.5.3, numeral 5° del Decreto 1073 de 2.015, establecía que *“Si la parte demandada no estuviere conforme con el estimativo de los perjuicios, podrá pedir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda que se practique un avalúo de los daños que se causen y se tase la indemnización a que haya lugar por la imposición de la servidumbre”* y que en este caso, se había superado dicho plazo, por cuanto la demandada había sido notificada desde el 27 de abril de 2022 (Archivo 54).

3.- La apelación. Oportunamente el apoderado de la demandada interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, argumentando que el Despacho, pasa por alto salvaguardar las garantías constitucionales al debido proceso, derecho de defensa, contradicción y a la propiedad de la demandada, pues si bien había sido notificada de la demanda desde el 27 de abril de 2022, debía considerarse la real afectación que tendría la imposición de la servidumbre pretendida, accediéndose a una indemnización estimada con información alejada de la realidad, dándose prevalencia a la formalidad, sobre lo sustancial, cuando solo se había advertido la diferencia con la inspección judicial practicada y máxime que en este tipo de trámite no era procedente la formulación de excepciones (Archivo 57).

4.- Decisión de la reposición. Mediante auto del 22 de diciembre de 2022, la a quo mantuvo la decisión objeto de reparo horizontal, por considerar que no se le había dado prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial, porque el respeto de los términos judiciales por parte de todos los intervinientes en el proceso era mandato legal, más aún cuando no se demostraba justificación alguna de su inobservancia, debiendo la parte que los desconoció asumir las consecuencias de dicha desatención (Archivo 60).

Sumado a lo anterior, arguyó que el ejercicio de la profesión de abogado implicaba responsabilidades tanto en el ámbito general, como particular, por ello su comportamiento debía estar ajustado al deber de *“Proceder con lealtad y buena fe*

en todos sus actos”.

Por último, resaltó que conforme lo expuesto en el artículo 13 del Código General del Proceso: *“Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.*

CONSIDERACIONES

1.-De la imposición de servidumbre eléctrica. Esta servidumbre parte del supuesto fáctico de que las entidades públicas tienen a su cargo la construcción de centrales generadora, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, por lo que, a través de su imposición, se les confiere la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, transitar por los mismos, adelantar obras tendientes a la efectiva prestación de dicho servicio y demás actividades que tengan la misma finalidad.

Por tanto, le corresponde a la entidad pública que esté a cargo de la ejecución del proyecto para la prestación del referido servicio, la formulación del proceso de servidumbre de conducción de energía eléctrica que se encuentra regulado en el Decreto 1073 de 2015 en sus artículos 2.2.3.7.5.1. y ss.

Dicha regulación establece en el artículo 2.2.3.7.5.2. que, con la demanda, debe aportarse *“El inventario de los daños que se causaren, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompañado del acta elaborada al efecto”* y, en el artículo 2.2.3.7.5.3., regula la manera y oportunidad procesal como la parte demandada puede controvertir dicho estimativo, en el evento de no estar de acuerdo con el tasado con la demanda, señalando que, para tal efecto, puede **“pedir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda que se practique un avalúo de los daños que se causen y se tase la indemnización a que haya lugar por la imposición de la servidumbre”** –numeral 5- (Resalto intencional).

En la misma preceptiva, contempla que dicho avalúo se practicará por dos peritos: Uno de la lista de auxiliares que tenga el Tribunal Superior respectivo, y otro

de la lista suministrada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y que, de existir desacuerdo, entre dichos auxiliares, debía designarse un tercer perito, de esta última lista, para que dirima el asunto, precisándose que solo es viable avaluar las mejoras existentes al momento de notificarse el auto admisorio de la demanda, por lo que se excluyen las realizadas con posterioridad, salvo que sean necesarias para la conservación del inmueble.

Con fundamento esos estimativos, avalúos, inventarios y demás pruebas que obren en el proceso, dado que no procede la formulación de medios exceptivos, el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago.

2.- Caso concreto. En el *sub lite*, la *a quo* denegó la solicitud de la parte demandada, consistente en la designación de peritos para evaluar los daños que se ocasionarían con la servidumbre y se tasara la indemnización, por considerar que había sido presentada en forma extemporánea.

Así, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la referida prueba pericial fue solicitada extemporáneamente o no, al tenor de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, que regula de manera especial el trámite de los procesos verbales de imposición de servidumbre de conducción eléctrica.

Es así que, como se indicó en las consideraciones, el citado compendio normativo regula la oportunidad para elevar la solicitud de designación de peritos, con el fin de que éstos evalúen los daños que la imposición de la servidumbre puede generar al predio sobre el cual se ha a constituir, y como consecuencia, se tase el monto de la indemnización que la entidad demandante debe reconocer al propietario de dicho bien, en el evento de que éste disienta de la tasación efectuada en la demanda.

Al respecto señala el numeral 5° del artículo 2.2.3.7.5.3. del mencionado Decreto que la aludida solicitud debe hacerse **dentro de los cinco (5) días siguientes** a la notificación del auto admisorio a la parte demandada. En este caso, dicha diligencia se llevó a cabo, en debida forma el **27 de abril de 2022**; por tanto, la propietaria tenía plazo hasta el **04 de mayo de 2022**, para formular dicha petición.

Sin embargo, durante dicho término la sociedad accionada guardó absoluto silencio, y solo hasta el 23 de junio de 2022, arrió poder que confirió a profesional

del derecho para que la representara en este asunto, a quien se le reconoció personería el 26 de septiembre del mismo año; y posteriormente, esto es, el **04 de octubre de 2022**, este apoderado solicitó la designación de peritos.

Es decir, que entre la notificación del auto admisorio y la presentación de esta última solicitud, transcurrieron más de **cinco (05) meses**, de donde se colige la extemporaneidad de la solicitud de la prueba pericial.

Ahora, aduce la parte demandada que solo le fue posible evidenciar que existía una diferencia entre la cantidad de árboles objeto de avalúo por parte de la demandante y los que realmente existían en la franja de terreno objeto de servidumbre, con la práctica de la inspección judicial, razón por la cual no había petitionado la designación de peritos antes de la realización de dicha diligencia, y que debía darse prelación al derecho sustancial, sobre el procesal, en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, a la defensa y contradicción, y propiedad, estableciéndose el valor real de los daños que le serían ocasionados y por ende, el monto que verdaderamente indemnice los mismos.

Efectivamente, advierte esta Corporación que en el acta de la diligencia de inspección judicial practicada sobre el lote objeto de la servidumbre que se pretende sea impuesta en esta demanda, el 24 de junio de 2022, se plasmó (Archivo 5_11):

“Se deja constancia que, previo a devolver el despacho comisorio debidamente diligenciado, la parte demandada ha manifestado tener inquietud respecto del inventario de árboles presentado por la demandante y que se encuentran en la franja de terreno sobre la cual recaerá la servidumbre, por lo que solicita su verificación, no obstante, se advierte que la mayoría de ellos reposan sobre una parte muy húmeda a la cual en el día de hoy no se puede acceder debido a las condiciones climáticas pues los últimos días ha llovido e incluso el día de hoy amaneció lloviendo en la zona, por la cual se delega para hacer dicha verificación, por parte de la demandada al arquitecto Albeiro Villero quien nos acompaña en este recorrido, y por su parte la demandante ISA lo hará a través del gestor Leonel Moscoso o cualquier otro que designen.”

En cumplimiento de lo anterior, y de acuerdo con el escrito presentado por la vocera judicial de la parte demandada, se había realizado visita al terreno

referenciado, **el día 29 de junio de 2022**, por parte de Wilmer Arce, Gestor Predial de Interconexión Eléctrica S.A., y el arquitecto Albeiro Villero en representación de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda. y aportó las planillas de inventario levantadas por dichos profesionales (Archivo 55_12).

Así las cosas, tenemos que, aun acogiendo el argumento aducido por la parte demandada para no haber presentado la solicitud de designación de peritos dentro del término legalmente concedido, esto es, dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación del auto admisorio, y que por ende, el plazo otorgado por el legislador para controvertir la estimación efectuada por la demandante, no debía, en este caso, iniciarse a contabilizar desde dicho momento procesal, sino desde que la parte accionada tuvo conocimiento que existía diferencia entre el avalúo presentado con la demanda y la realidad, la solicitud en mención resulta extemporánea, conforme pasa a explicarse:

- De lo relacionado puede colegirse que efectivamente, en la inspección judicial practicada sobre la franja de terreno que sería eventualmente afectada con la servidumbre, se generaron **dudas** para la parte demandada sobre la coincidencia entre el inventario de los árboles presentado con libelo genitor y los que realmente se encontraban sobre dicha franja.

- Que, en razón de lo anterior, se dispuso la verificación de los árboles existentes en esa franja, a través de visita a la misma, por parte de dos profesionales, uno en representación de la demandante y otro de la demandada, lo que se hizo el **29 de junio de 2022**, para lo cual se realizaron planillas con el inventario de los árboles que efectivamente reposaban en ese terreno.

- Por tanto, a partir de la realización del nuevo inventario, la demandada tuvo **certeza** sobre la diferencia existente entre éste y el adunado por la demandante, pues fue ésta incluso, a través de su apoderada judicial, quien lo arrió al juzgado comisionado para que hiciera parte de la actuación surtida por el mismo.

Es así, que contabilizando los cinco (5) días que contempla el numeral 5° del artículo 2.2.3.7.5.3. del Decreto 1073 de 2015, desde la fecha en que la demandada se enteró de la diferencia entre el inventario aportado con la demanda y la realidad, el plazo para presentar la solicitud de designación de peritos

plurimencionada finiquitó el **07 de julio de 2022**, y como se expuso antes, la misma fue presentada el **04 de octubre de 2022**.

Y es que, aun considerando que la demandada, a través de su apoderada, ni siquiera se enteró del nuevo inventario en la misma fecha de la visita, sino al momento de aportarlo al Juzgado comisionado, como se evidencia en el expediente digital, para ahondar en garantías, pues se desconoce dicha situación, ya que nada se indica al respecto, podría incluso tomarse como referencia la fecha en que se allegó dicho escrito al citado ente judicial, pero tampoco se cumpliría con la oportunidad legal. Veamos:

- Si bien se evidencia en el expediente digital que la letrada de la sociedad demandada, allegó escrito aportando el inventario realizado en cumplimiento de lo ordenado en la inspección judicial, como viene de señalarse, el mismo carece de fecha y no reposa en el expediente constancia de su recepción.

- Sin embargo, como existe certeza que aquél fue remitido antes de la devolución del despacho comisorio al juzgado comitente, lo que se dispuso mediante auto del **31 de agosto de 2022** (Archivo 55_13), debe tenerse por cierto, que para esta fecha la abogada de la demandada ya había conocido el contenido del nuevo inventario y, por ende, que éste difiere del presentado por la actora.

En consecuencia, considerando este último caso, tuvo la sociedad convocada, la oportunidad de solicitar designación de peritos hasta el **07 de septiembre de 2022**; sin embargo, dejó fenecer este término, por cuanto, como ya se expuso, solo lo hizo hasta el **04 de octubre del mismo año**.

Bajo estos parámetros, conforme lo esbozado con antelación, se confirmará la decisión apelada, y se condenará en costas a la parte recurrente, al tenor de lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el juzgado de origen, conforme lo dispuesto en el inciso 1° del precepto 366 *ibídem*.

Como agencias en derecho se fijará la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo establecido en el numeral 7° del artículo 5° del Acuerdo No. PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, la suma de UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000).

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** la decisión contenida en el auto del 11 de octubre de 2022, proferido por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro de la demanda Verbal de imposición de servidumbre de conducción eléctrica, formulado por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en contra de Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda., acorde con lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se condena en costas a la parte demandada, a favor de la demandante.

Como agencias en derecho se fija la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000), que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022